

La Primera Piedra

Superioridad Moral Imposible

POR LORENZO MEYER

LA actitud del Presidente Reagan y sus colaboradores frente a quienes ellos consideran la encarnación del mal —los gobernantes soviéticos, nicaragüenses, libios, palestinos y, en cierto sentido, los mexicanos— me hacen sospechar que si el actual Presidente norteamericano y sus colaboradores se hubieran encontrado hace dos mil años entre la muchedumbre que, según el Nuevo Testamento, se proponía lapidar a la mujer adúltera, no hubieran hecho mayor caso de la advertencia de Cristo: "El que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero". Lo más probable es que hubieran considerado la condición propuesta por Jesús como un mero detalle técnico y que, en cualquier caso, ellos eran realmente la gente virtuosa, sin pecado. Por tanto, me imagino que no hubieran dudado en lapidar a la infeliz mujer. Ya se verá por qué digo esto.

Es obvio que en México aún no hemos encontrado la fórmula política para hacer que el interés individual de nuestros gobernantes y administradores coincida con lo que en cada época es el interés público, al menos al punto de no vernos singularizados por nuestra corrupción, como es hoy el caso.

★

DESDE que España nos incorporó de manera más o menos violenta al mundo occidental en el siglo XVI y hasta la fecha, quienes han detentado los cargos públicos —desde el alguacil hasta el policía y desde el virrey hasta el presidente— han usado sus puestos con frecuencia notoria para servir en primer lugar a sus intereses personales y sólo después al supuesto interés colectivo.

En México pocos dudan que algunas de las acusaciones que se han hecho desde Estados Unidos a funcionarios mexicanos o a sus parientes pueden ser ciertas. De sobra sabemos que, entre nosotros, la corrupción de un buen número de los llamados servidores públicos es un hecho palpable. Así pues, no es enteramente gratuita la

acusación que está implícita en los considerandos de la Ley Antinarcóticos que acaba de pasar el Congreso de Estados Unidos y que supone que el combate contra el tráfico de drogas en México no es lo que debería ser.

Sin embargo, esta moneda tiene dos caras. Es verdad que la corrupción norteamericana no se parece a la nuestra —allá los servidores públicos son más celosos del cumplimiento de su deber— pero también existe. Es, en realidad, una falla enorme de la cultura cívica norteamericana el hecho de que en Estados Unidos existan cuando menos 37 millones de personas que de manera esporádica o sistemática están dispuestas a violar sus propias leyes y dar vida a un mercado ilícito de marihuana, heroína y, sobre todo, de cocaína, cuyo valor total al menudeo se calcula en 110,000 millones de dólares anuales.

En países pobres y casi en quiebra como es el caso de México, no es difícil explicar por qué mucha gente, desde campesinos hasta pistoleros, policías, soldados o jueces, sucumben a la tentación de aumentar sus ingresos y nivel de vida por la vía del cultivo y contrabando de marihuana y drogas a quienes las comercializan en Estados Unidos. Lo que es mucho más difícil de explicar es por qué tantos millones de norteamericanos, con los altos niveles de vida que ahora tienen, y siendo parte de una sociedad que de mil maneras insiste en que su superioridad material es también moral, incurren en un acto que además de ilegal resulta costoso y altamente dañino a su salud.

SI los norteamericanos adictos a las drogas fueran, en su mayoría aquellos que "nacieron para perder" y que se escapan de su triste realidad por la vía de las drogas quizá no fuera tan difícil comprenderlos. Pero sabemos que un buen número de los usuarios de las sustancias prohibidas son miembros de la clase media y la clase alta, es decir, son los ganadores.

Es natural que el gobierno norteamericano haya declarado el combate a la drogadicción como una tarea prioritaria y que, entre otras cosas, busque detener el tráfico internacional de drogas. Esta es, en

realidad, una política loable. A nosotros también debe de interesarnos este combate. La existencia de una poderosa mafia de narcotraficantes en México no le conviene ni al Estado ni a la sociedad mexicanas. Sin embargo, hay mucha distancia entre este deseo de combatir al narcotráfico y la insistencia del gobierno, la prensa y la televisión norteamericanas de calificar a nuestro lado de la medalla —el aprovisionamiento de las drogas y las fallas en combatirlo— como corrupción y no llamar de la misma y exacta manera a la notable predisposición de millones de norteamericanos a violar su ley y consumir la droga en busca de un paraíso que se supone que ya lo tienen en la realidad.

Proveer y consumir drogas son dos formas de corrupción. Nosotros lo aceptamos y deploramos, pero también consideramos que esta corrupción al sur del río Bravo tiene como contrapartida una, de exacta-

mente igual dimensión aunque de distinta forma, del lado norte del río. No veo que haya ninguna superioridad ética del que consume las drogas sobre el que las produce.

Desde este punto de vista, el gobierno y la opinión pública de Estados Unidos deberían de dejar a un lado

su unilateralidad en el enfoque del terrible problema de las drogas y empezar por reconocer que no tienen el derecho a arrojarnos la primera piedra, pues no hay superioridad moral de ninguna de las partes que forman la compleja e infame cadena que da vida al fenómeno. Sería bueno, en

cambio, que ya desapareciera la prepotencia disfrazada de buena conciencia. Sólo entonces podrán contar los norteamericanos con una disposición adecuada de parte de las autoridades y la sociedad mexicanas para encarar de manera conjunta el combate a las drogas.